

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Lic. Miguel C. Sanchez, como encargado del poder ejecutivo del mismo Estado, fundándose en que la 4ª Legislatura del propio, erigida en Gran Jurado para conocer de sus faltas oficiales, había violado con sus procedimientos los artículos 14 y 20 de la Constitución federal; visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal, el fallo del inferior, y considerando:

1º Que la ingerencia legítima de los jueces federales en casos como el presente, está estrictamente limitada á investigar si en el juicio han sido violadas las garantías del hombre consignadas en la Carta fundamental, sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento, ni el modo con que dichas garantías deben ser atacadas, bastando el hecho de haberlo sido.

2º Que consta de autos que el solicitante recibió las citaciones necesarias para procurar su defensa, de donde se infiere que fueron suficientemente respetadas las garantías de que habla el art. 20 de la Constitución.

3º Que respecto de la legitimidad de la acusación, la brevedad de la instrucción y los términos todos del juicio, con tal de dejar á salvo en lo sustancial los derechos del acusado, solo el Gran Jurado en que se erigió la 4ª Legislatura de Yucatan, en uso de sus legales atribuciones, tenía derecho de decidir.

4º Que no puede tacharse de incompetente á dicho Gran Jurado, por haber pronunciado el veredicto condenatorio sin el número suficiente de representantes, pues no se trataba de una ley ó decreto de la Legislatura, sino del fallo de un Tribunal creado de antemano por la ley.

5º Que no teniendo impedimento alguno los representantes recusados mientras no se

hiciese respecto de ellos la declaración de haber lugar á la formación de causa, existía un *quorum* competente, y en consecuencia podía la Legislatura funcionar sin obstáculo alguno legal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución se declara:

Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de Yucatan en 16 de Diciembre de 1873, y en consecuencia, que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. M. Castellanos Sanchez, contra el veredicto del Gran Jurado que lo declaró culpable.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia publíquese; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.—P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Manuel de Castañeda y Nágera.—P. Ordáz.—Ignacio Ramirez.—José M. Lozano.—Simon Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—J. G. Ramirez.—I. Altamirano.—Enrique Landu*, secretario.

Es copia. México, Marzo de 1874.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Genovevo Pavon, contra el Gefe político de Irapuato, por violacion de garantías en la causa eriminal que le instruyó por el delito de robo con asalto.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que ha examinado la causa instruida al reo Genovevo Pavon, por el delito de asalto cometido en la hacienda del Copal y en su concepto, la

culpabilidad de este procesado no está probada de una manera plena. Los hechos en que se funda la sentencia de muerte que contra el pronunció la Gefatura política de Irapuato, son: haber sido reconocido como uno de los asaltantes por el C. Canuto Aranda, y haberse encontrado en su poder algunas prendas, que el mismo Aranda declaró que habían sido de las robadas en el asalto de la hacienda del Copal. Estos dos hechos se fundan en el dicho de un solo testigo, que conforme á la ley no es prueba plena para pronunciar una sentencia condenatoria.

La ley de 23 de Mayo de 1872 para su aplicacion, supone que esté probado el delito y la culpabilidad del procesado plenamente; con tanta mayor razon, cuanto la única pena con que castiga á los plagiarios y saltadores es la de muerte.

Estas consideracion son bastantes para conceder el amparo que solicita Genovevo Pavon, por considerar violadas en su persona las garantías individuales que otorga la Constitucion en su art. 20.

La ley de 23 de Mayo de 1872, suspendió esclusivamente para los saltadores y plagiarios las garantías individuales que se invocan en el presente recurso; pero habiéndose probado en el término que con este objeto se concedió para la causa instruida por el C. Gefe político de Irapuato y por la informacion testimonial rendida ante el Juzgado de Distrito, que no consta por una prueba tan clara como la luz del medio dia que Genovevo Pavon deba considerarse como saltador, ha estado en el goce de las garantías individuales que para los delitos de de asalto y plagio, suspendió la ley citada.

Por esta razon, el Promotor fiscal pide: se sirva el Juzgado conceder el amparo que solicita Genovevo Pavon.

Guanajuato, Octubre 16 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Guanajuato, 16 de Enero de 1874.—Visto el presente juicio de amparo que ha promovido Genovevo Pavon, por violacion del art. 20 del pacto federal, en el proceso que le instruyó la Gefatura del Partido de Irapuato, por los delitos de asalto y robo. Considerando: que para los saltadores y plagiarios estan suspensas las garantías que el peticionario invoca, porque así lo establece la ley de 23 de Mayo de 1872, con arreglo á la cual se le juzgó y sentenció. Considerando: que no es de la competencia de la Justicia federal apreciar el valor jurídico de los cargos que resultan contra el presunto reo en un proceso que sea de la competencia de los Tribunales de los Estados, y por lo mismo, el poder judicial de la federacion invadiría facultades ajenas, si declarara la culpabilidad ó inocencia de un reo sugeto á la jurisdiccion de dichos Tribunales. Considerando: que los juicios de amparo no tienen por objeto oír en defensa á un acusado, ni absolverlo ó condenarlo, sino solamente proteger el goce de las garantías individuales cuando las viole alguna autoridad. Considerando: que en el caso de que aquí se trata, sean cuales fueren los datos que la Gefatura de Irapuato haya tenido para sentenciar á muerte al quejoso, este Juzgado no debe inmiscuirse en valorizarlos, supuesto que el delito atribuido al peticionario es de los comprendidos en la citada ley de 23 de Mayo de 1872 y ha sido justificado por los medios que creyó conducentes la expresada Gefatura, sin que se haya puesto en duda ni por los reos ni por sus defensores la existencia del asalto y robo en que consistió el delito. Considerando: que en el proceso respectivo procedió el C. Gefe de Irapuato con arreglo á sus atribuciones, cargando al reo con el único testigo de cargo que se hallaba en el lugar del juicio, proveyéndolo de defensor, corriendo traslado de los autos para que se pudiesen preparar la defensa, y admitiendo el escrito de ex-

culpacion correspondiente. Considerando: que mediante tales procedimientos y no habiendo habido acusador formal, resulta que no se infringió en perjuicio del quejoso ninguna de las garantías que proclama el art. 20 de la Constitucion, las cuales por otra parte estan suspensas para los saltadores; por estas consideraciones y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Genovevo Pavon, contra el acta criminal que le instruyó el C. Gefe del Partido de Irapuato, por el delito de robo con asalto.

Notifíquesele este fallo á las partes; publíquese en el periódico oficial y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales.

Así el nominado Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 25 de Enero de 1874.—*Luis G. Medina.*

#### *Rescutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Febrero 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Genovevo Pavon, contra el Gefe político de Irapuato, que en el proceso que le instruyó por asalto y robo no le hizo saber el nombre de su acusador, ni lo careó con los testigos que declararon en su contra, sin facilitarle los datos de la causa para preparar sus descargos, ni oírle en defensa, lo sentenció á la pena de muerte, con violacion de las garantías consignadas en el art. 20 de la Constitucion federal, y

Considerando: que la ley de 23 de Mayo de 1872, con arreglo á la cual fué juzgado el quejoso, suspende para los saltadores y plagarios las garantías que consigna el art. 22 de la Constitucion de la República; ga-

rantías que por otra parte, no aparece hayan sido violadas, pues si no se hizo saber el nombre del acusador fué porque no lo hubo, y sí se careó á Pavon con el testigo que declaró en su contra y se oyó la defensa que con presencia de las constancias de la causa pronunció en su favor el C. Luciano Medel.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 16 de Enero del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Genovevo Pavon, contra los procedimientos de la causa criminal que le instruyó el C. Gefe político del partido de Irapuato, por el delito de robo con asalto.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Tocon.

Así por unanimidad de votos lo decretaron las CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*J. J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*P. Ordaz.*—*L. Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 6 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.